

## JUDGMENT OF THE SUPREME COURT

*Chile v. Gastón*

**TRIBUNAL SUPREMO**

**Sala de lo social**

**Fecha Sentencia:** 25/06/2012

**Recurso Num.:** UNIFICACIÓN DOCTRINA 2568/2011

**Fallo/Acuerdo.:** Sentencia Estimatoria

**Votación:** 19/06/2012

**Procedencia:** T.S.J. MADRID SOCIAL

**EJECUCIÓN DE SENTENCIA CONTRA LA EMBAJADA DE CHILE. EMBARGO DE CUENTAS CORRIENTES. SE DISCUTE SU NATURALEZA EMBARGABLE O INEMBARGABLE. SE DESESTIMA LA EMBARGABILIDAD EN ESTE CASO. DOCTRINA DEL TCº SS. 107/92 Y 292/94.**

**TERCERO.-** Sin combatir ninguno de los hechos se alega la infracción de los arts 606, 606 y 609 de la LEC, el art. 21.2 de la LOPJ, el art. 22.3 de la Convención de Viena de 1961, de relaciones diplomáticas, y el art. 31.4 de la Convención de Viena de 1963 de relaciones consulares, así como la consolidada doctrina del TC (SSTS 107/1992, 292/1994, 18/1997, Y 176/2001). La cuestión que se plantea se circunscribe a determinar si es posible el embargo de las cantidades citadas de las cuentas corrientes bancarias de la Embajada.

Señala el Ministerio fiscal, en su informe, que “en realidad en el presente caso nos encontramos ante la confrontación de normas legales de distinta naturaleza. De una parte, las normas de derecho internacional recogidas en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de 18 de abril de 1961 y, de otra, el derecho al trabajo que recoge el artículo 35 CE, el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 CE en su vertiente de ejecución de sentencias, y diferentes preceptos del Estatuto de los Trabajadores”.

Y continua: “Dice el artículo 22.3 de la mencionada Convención que “los locales de la misión, su mobiliario y demás bienes situados en ellos, así como los medios de transporte de la misión, no podrán ser objeto de ningún registro, requisa, embargo o medida de ejecución”. Y realizando una interpretación literal del precepto acorde con la realidad social, conforme dispone el artículo 3 del CC, queda claro que nada dice sobre las cuentas corrientes, pues exclusivamente se refiere a locales o edificios, mobiliario y demás bienes incluidos en esos edificios, así como los medios de transporte”.

Sin embargo, la sentencia 107/92, establece que “la relatividad de la inmunidad de ejecución de los Estados extranjeros se asienta en la distinción entre bienes destinados a actividades “*iure imperii*” y bienes destinados a actividades “*iure gestionis*”; mas, con independencia de este criterio, los bienes de las misiones diplomáticas y consulares son absolutamente inmunes a la ejecución, en virtud de los Convenios de Viena de 1961 y 1963”.

“Del art. 22.3 del Convenio de Viena de 1961 se deduce que no son en absoluto susceptibles de ejecución forzosa los bienes de la Republica de Sudáfrica situados en el recinto de su Embajada, incluida la sede misma. Ahora bien, la duda se plantea respecto de aquellos bienes del Estado extranjero que, sin estar en la sede de la Embajada ni estar expresamente mencionados en el art. 22.3 de la Convención de Viena de 1961, están destinados por el Estado extranjero al sostenimiento de su misión diplomática. Concretamente, el problema consiste en determinar si las cuentas corrientes bancarias abiertas a nombre de una Embajada o cuyos fondos estén destinados al sostenimiento de la misma están amparadas por el citado precepto, puesto que el Auto que anula la sentencia impugnada procedió al embargo de parte del importe de una cuenta corriente bancaria abierta a nombre de la Embajada de Sudáfrica”.

“Esta inembargabilidad de las cuentas corrientes de titularidad del Estado extranjero en bancos situados en el territorio nacional afectados al desenvolvimiento de la actividad ordinaria de las misiones diplomáticas y consulares, constituye la practica internacional generalizada, de la que se deriva que la inmunidad de los Estados y de los bienes de las misiones diplomáticas y consulares en materia de ejecución impide que la ejecución forzosa pueda dirigirse, dentro de los bienes que las misiones diplomáticas y consulares puedan tener en el Estado del foro, contra aquellas cuentas corrientes. Y ello incluso si las cantidades depositadas en Entidades bancarias puedan servir también para la realización de actos en lo que no esta empeñada la soberanía del Estado extranjero, esto es, a la realización de actividades “*iure gestionis*” a las que puede no alcanzar la ratio de la inmunidad de los bienes de las misiones diplomáticas y consulares. Esta eventualidad de que una cuenta corriente destinada a asegurar el funcionamiento de la misión diplomática, y consular del Estado extranjero pueda ser utilizada también para fines comerciales no justifica la exclusión de esa inmunidad de ejecución, y consecuente inembargabilidad, tanto por el carácter único e indivisible del saldo de la cuenta corriente, como por la imposibilidad de una investigación de las operaciones y de los fondos y destinos de los mismos en una cuenta corriente adscrita a una misión diplomática, lo que, supondría una interferencia en la actividad de la misión diplomática, contraria a las reglas del Derecho internacional público”.

“Puede suceder que, al margen de los bienes inembargables porque efectiva o presumiblemente estén destinados al desenvolvimiento de la actividad de las misiones diplomáticas o consulares, el Estado extranjero -en este caso, la Republica de Sudáfrica-, objeto de ejecución, sea titular de otros bienes en nuestro país. Respecto de estos bienes, si existen, la inmunidad de ejecución garantizada por el ordenamiento internacional y, por remisión, por el art. 21.2 LOPJ, solo alcanza a aquellos que estén destinados a la realización de actos “*iure imperii*”, pero no a aquellos destinados a la realización de actos “*iure gestionis*”. De este modo, los Tribunales ordinarios, para satisfacer el derecho a la ejecución de sentencias, están habilitados para dirigir la actividad de ejecución forzosa frente a aquellos bienes que estén inequívocamente destinados por el Estado extranjero al desenvolvimiento de actividades industriales y comerciales en la que no esté empeñada su potestad soberana por actuar conforme a las reglas del tráfico jurídico-privado. Corresponde en cada caso al Juez executor determinar, conforme a nuestro ordenamiento, de

entre los bienes de los que sea titular específicamente el Estado extranjero en nuestro territorio, cuales están inequívocamente destinados al desenvolvimiento de actividades económicas en las que dicho Estado, sin hacer uso de su potestad de imperio, actúa de la misma manera que un particular”.

En el caso de la sentencia del TC nº 107/92 se otorgó parcialmente el amparo al trabajador recurrente porque “La sentencia impugnada, al declarar genéricamente la inejecución contra el dinero efectivo que el Estado ejecutado posea en Entidades bancarias españolas, al margen del destino específico de ese dinero, y confirmar el archivo de las actuaciones, ha aplicado una regla de inmunidad absoluta de ejecución de los bienes de la República de Sudáfrica que no viene exigida por el art. 21.2 LOPJ y por tanto, supone una inejecución de las sentencias firmes sin causa legal desconocedor del derecho a la tutela judicial efectiva”, anula el Auto que lo acordó y repone las actuaciones ante el Juzgado de lo Social a fin de que prosigan las actuaciones del proceso de ejecución frente a otros eventuales bienes del Estado ejecutado, que no gocen de la inmunidad de ejecución en los términos indicados en el fundamento jurídico 6º”. Esta doctrina se reitera en la sentencia del mismo Tribunal nº 292/94, que, en un caso similar, otorga también parcialmente el amparo y ordena la misma reposición de las actuaciones, porque “el Auto recurrido procedió a denegar la ejecución solicitada sin intentar determinar, conforme establecíamos en nuestra STC 107/1992 (fundamento jurídico 6º), la existencia de bienes del Estado demandado inequívocamente destinados al desenvolvimiento de actividades económicas y a los que no alcance la inmunidad específica de las misiones diplomáticas”.

**CUARTO.-** Así pues, en el caso ahora examinado, y conforme a la anterior doctrina, **las cuentas corrientes de la titularidad de la Embajada de Chile que fueron embargadas no aparecen inequívocamente destinadas al desenvolvimiento de actividades económicas en que no esté empeñada su potestad soberana – aunque eventualmente, además de para atender al funcionamiento de la actividad diplomática, fuesen también utilizadas para fines comerciales-, y por tanto no puede calificarse de bienes embargables conforme a la interpretación que la práctica internacional contemporánea hace del art. 22.3 de la Convención de Viena.**

Consecuentemente, **el Juez de la ejecución recabando la colaboración de los poderes públicos del Estado del Foro (España) y, en especial, de su Ministerio de Asuntos Exteriores – puede seguir agotando su actividad indagatoria sobre la existencia de otros bienes embargables – forma de pago de la nomina del personal laboral contratado, etc.- o remitir a que se curse el exequator de la sentencia en los términos que ofrece en su Nota la Embajada condenada. Pero lo que no procede es presumir que las cuentas embargadas están exclusivamente destinadas a actividades de gestión y trabar el embargo**, por lo que procede estimar el recurso y casar la sentencia recurrida y resolver el debate de suplicación estimando el recurso de tal naturaleza y dejando sin efecto el auto del Juzgado que ordenó trabar el embargo.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

**FALLAMOS**

Estimamos el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el letrado D. Roberto Sáinz-Trápaga y García en nombre y representación de la República de Chile frente a la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 8 de junio de 2011, dictada en el recurso de suplicación nº 1670/2011. Casamos y anulamos dicha sentencia y, resolviendo el debate de suplicación, estimamos el recurso de esta naturaleza impuesto contra el auto del Juzgado de lo Social nº 10, **que revocamos dejando sin efecto la providencia de 30/7/2010, que declaró embargados los saldos de las cuentas bancarias de la titularidad de Embajada de Chile a que se ha hecho referencia. Sin costas.**